Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales gestionará lo pertinente según lo previsto en el inciso 2 del artículo 1.2.6.2. del Decreto 1625 de 2016.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución por parte de la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa, remitir copia a la División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, para que proceda a la actualización del Registro Único Tributario (RUT) con la responsabilidad 15 de autorretenedor a la sociedad CENTRO DE CONTROL DE CÁNCER SAS con NIT 830.008.300-2 y a la Subdirección de Recaudo, con el fin que se controle el hecho que la sociedad autorizada a través de la presente resolución, no incurra en las causales de suspensión señaladas en el artículo 4° de la Resolución número 005707 del 5 de agosto de 2019.

Artículo 6°. *Vigencia* la presente resolución rige a partir de su fecha de publicación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de febrero de 2024.

El Subdirectora de Recaudo,

Adriana del Pilar Solano Cantor.

(C. F.).

Imprenta Nacional de Colombia. Banco Davivienda 4891475.8-II-2024. Valor \$874.000.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NUMERO 0088 DE 2024

(enero 30)

por la cual se establecen las medidas para afrontar y mitigar los efectos de la temporada seca o de menos lluvia, con incidencia del Fenómeno El Niño 2024, y se establecen otras disposiciones.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en uso de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias en especial de las contenidas en la Ley 99 de 1993, artículo 31, Ley 1523 de 2012, el Decreto 1076 de 2015, el Decreto Ley 2811 de 1974 y demás normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, en este sentido; el artículo 8° señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que el artículo 79 *ibidem*, establece que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que el artículo 80 *ibidem*, establece que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.”

Que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su artículo 1°, señala: “El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 1° dispone en sus numerales 2 y 7, que la política ambiental colombiana seguirá entre otros, los siguientes principios generales: 2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. 7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

Que la misma ley en su numeral 23 artículo 31, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales deben “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación”.

Que el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012 dispone que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y los habitantes del territorio colombiano y en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose como el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Que el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, menciona que los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Quienes deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.

Que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en desarrollo de sus funciones aplica el “PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN”, normado en el artículo 3°, numeral 8 de la Ley 1523 de 2012, que señala que, cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo.

Que artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, menciona que los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Quienes deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.

Que de conformidad a lo establecido en el numeral 35 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y del Sistema Nacional Ambiental (SINA), emitió la Circular CDMB 013 de fecha 13 de diciembre de 2023, con las “RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LA TEMPORADA SECA O DE MENOS LLUVIAS DE FINAL DE AÑO 2023 E INICIO DE AÑO 2024, CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO”, con base en el informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo (diciembre 2023, enero y febrero 2024), del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), publicado el 21 de noviembre de 2023, en el cual se informa que: “De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es muy probable que el actual episodio de El Niño continúe durante el próximo invierno y principios de la primavera del hemisferio norte (probabilidad del 90%), y adquiera en su apogeo valores correspondientes a un episodio intenso; apogeo que es estimado por los modelos de distintos centros internacionales de predicción climática se presente durante el trimestre que estamos atravesando; es decir, el correspondiente al comprendido entre noviembre de 2023 y enero de 2024, donde se indica además que durante la temporada seca, incidiendo por el Fenómeno El Niño, se puede presentar incremento en las temperaturas y déficit de precipitación en el territorio, generando eventos tales como: sequía, incendios forestales, heladas, avenida torrencial, erosión, movimientos en masa e inundaciones.

Que el artículo 28 del Decreto 948 de 1995, precisó la prohibición de quemas de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.

Que el artículo 29 *ibidem*, puntualizó la prohibición dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas.

Que el artículo noveno de la Resolución número 532 de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, precisa que “Las diferentes autoridades ambientales podrán adoptar normas más restrictivas que las establecidas en el presente acto administrativo para efectos de las quemas agrícolas y mineras controladas, dando aplicación al principio de rigor subsidiario”.

Que la inflamabilidad del material vegetal varía según su contenido de humedad, y se incrementa con la disminución de la precipitación y aumento de la temperatura del aire.

Así mismo, los vientos ayudan a desecar mucho más las coberturas vegetales, diseminan y aumentan la velocidad de propagación del fuego.

Que un porcentaje considerable de los incendios forestales ocurridos son de origen antrópico (Quemas realizadas como práctica agrícola y otras actividades).

Que los incendios forestales alteran, degradan y/o destruyen los ecosistemas del país, afectando de manera severa la flora, la fauna, el suelo, el paisaje y el recurso hídrico.

Que el artículo 3° de la Ley 1575 de 2015, establece que los municipios y distritos deben garantizar la gestión del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, por medio de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos o convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios.

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015. Funciones de las Autoridades Ambientales, en su literal f, establece que estas deben “Ejercer, con el apoyo de las autoridades departamentales, municipales o distritales, los controles necesarios sobre quemas abiertas”.

Que el artículo 2.2.5.1.2.2, del Decreto 1076 de 2015, refieren que son “Actividades especialmente controladas. Sin perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad contaminante, se considerarán como actividades, sujetas a prioritaria atención y control por parte de las autoridades ambientales, en su literal a) Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás quemas abiertas prohibidas; d) Las quemas abiertas controladas en zonas rurales; e) La incineración o quema de sustancias, residuos y desechos tóxicos peligrosos”.

Que el artículo 2.2.5.1.3.12., del Decreto 1076 de 2015, establece que “Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional”.

Que el artículo 2.2.5.1.3.13 ibidem, puntualizó que “Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas; ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios, podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus desechos sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento; Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre que no causen molestia a los vecinos”.

Que el artículo 2.2.5.1.3.14 del Decreto 1076 de 2015, establece sobre las quemas abiertas en áreas rurales: “Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente: Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e infraestructura”.

Que el artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que “Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados, literal a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales”.

Que el 2.2.5.1.3.15, del mismo decreto del inciso anterior, determina que “Los responsables de quemas abiertas controladas en zonas rurales, deberán contar con las técnicas, el equipo y el personal debidamente entrenado para controlarlas. Las características y especificaciones técnicas relacionadas con estas quemas se señalarán en la resolución que otorgue el respectivo permiso”.

Asimismo, el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.2.13.16, establece “Restricción de usos o consumos temporalmente. En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, la Autoridad Ambiental competente podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El presente artículo será aplicable, aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos. Los derechos de uso sobre aguas privadas también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este artículo. (Decreto 1541 de 1978, art. 122).”

Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del mismo decreto, establece las medidas para la atención de episodios cuando se declare alguno de los niveles de prevención, alerta o emergencia, además de otras medidas que fueren necesarias para restablecer el equilibrio alterado, asimismo, la Ley 147 de 1998, indica derechos colectivos de los ciudadanos en el goce de un ambiente sano de conformidad con las disposiciones reglamentarias en el que se define “La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente. En este sentido, es necesario conservar el equilibrio ecológico

debido a los acontecimientos siniestros ocasionados por pérdida arbórea significativa para la especie humana y animal, por tanto, es necesario acoger las diferentes directrices y normatividad de protección y prevención ambiental.

Que mediante Resolución CDMB 0011 del 7 de enero de 2010, además de las prohibiciones vigentes respecto a quemas de bosque natural y vegetación natural protectora y la práctica de quemas abiertas dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, prohíbe en todo el territorio del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), las quemas abiertas y controladas. En caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en la citada Resolución, la Autoridad Ambiental impondrá las medidas preventivas y sancionatorias previstas en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

Que la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), formularon el Plan Nacional de Gestión ante el fenómeno “El Niño”, con el fin de establecer acciones anticipatorias de Preparación de la respuesta y Recuperación temprana para la planificación y ejecución de acciones estratégicas que permitan el fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas y administrativas para afrontar los efectos e impactos del Fenómeno “El Niño”, orientado al ámbito público, privado y comunitario; teniendo principales amenazas asociadas: la Sequía, Incendios forestales, Heladas, Olas de Calor y Plagas y/o Vectores.

Que mediante Circular número 16 emitida por la Procuraduría Delegada para Asuntos ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, el 13 de octubre de 2023, emite una “Alerta para la implementación de acciones de prevención, mitigación y atención del fenómeno del Niño 2023–2024 y de los impactos previstos: desabastecimiento hídrico, disminución de los niveles de agua en los embalses de generación de energía hidroeléctrica e incendios forestales” y a la vez, “Instar a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible para se adopten medidas inmediatas y de contingencia en relación con el manejo y administración del recurso hídrico, para la reducción del riesgo en materia de oferta y disponibilidad del agua, dentro de lo cual se recomienda priorizar las concesiones para consumo doméstico y la seguridad alimentaria; fortalecer la promoción y el seguimiento de los programas de uso eficiente y ahorro de agua, y adelantar los procesos administrativos de reglamentación corrientes para los depósitos superficiales y subterráneos de agua cuando a ello haya lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974 y al Decreto 1076 de 2015”.

Que, de acuerdo con el Informe de Predicción Climática a Corto, Mediano y Largo Plazo en Colombia publicado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) el 19 de enero de 2024, el instituto señaló, que la continuidad del fenómeno El Niño 2023-2024, bajo condiciones oceánicas y atmosféricas que determinan una intensidad fuerte del fenómeno, estimando que el evento persista por lo menos hasta el mes de marzo de 2024. Para el mes de febrero, se estima para la región Andina, reducciones de lluvia entre el 10% y 60% con respecto a la climatología 1991–2020 en gran parte de la región.

Así mismo, de acuerdo al Boletín número 0086 Condiciones hidrometeorológicas actuales del Ideam de fecha 29 de enero de 2024, se menciona dentro del Pronóstico de la Amenaza por Incendios de la Cobertura Vegetal que se encuentran en ALERTA ROJA, los 13 municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CDMB: Bucaramanga, California, Charta, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Rionegro, Suratá, Tona y Vetás.

Que mediante Decreto 0037 de 27 de enero de 2024, la Presidencia de la República, declara una situación de Desastre Nacional en todo el territorio nacional, por el término de doce (12) meses, prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto, favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante circular con radicado número 10002024E4000010 de fecha 29 de enero de 2023, emitió las ACCIONES PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL FENÓMENO CLIMÁTICO “EL NIÑO” Y EL MANEJO DE SUS EFECTOS ADVERSOS EN ANIMALES SILVESTRES, GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTAMINACIÓN DEL AIRE, en donde se precisa a las corporaciones autónomas regionales y demás entidades que conforman el sistema Nacional Ambiental (SINA) y El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) a continuar con el desarrollo de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y manejo del desastre ante los efectos adversos del fenómeno tal como lo estipula la Ley 1523 de 2012, lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Compilatorio 1076 de 2015.

Como consecuencia de lo anteriormente mencionado, la Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral del Territorio (SOPIT), la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental (SEYCA) y la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial (SURYT), de la CDMB, formularon las medidas para afrontar y mitigar los efectos de la temporada seca o de menos lluvia, con incidencia del Fenómeno El Niño 2024, para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva sus efectos, con la implementación de actividades de prevención, mitigación y recuperación frente a la ocurrencia de dicha anomalía climática, que se presenta en gran parte del país y por consiguiente en el departamento de Santander, en los trece (13) municipios de Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

En razón y mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB),

RESUELVE:

Artículo 1°. *Objeto*: Establecer las siguientes medidas para prevenir, afrontar y mitigar los efectos de la temporada seca o de menos lluvia, con incidencia del Fenómeno El Niño 2024, en los trece (13) municipios pertenecientes a la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Parágrafo 1°: Las medidas para afrontar y mitigar los efectos de la temporada seca o de menos lluvia, con incidencia del Fenómeno El Niño 2024 que se establecen por medio de la presente resolución tendrá carácter transitorio mientras el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantenga las alertas conforme a las condiciones climáticas que predominen en el territorio.

Artículo 2°. *Medidas*: Adóptense las siguientes medidas y acciones para la reducción del riesgo de desastres asociados a eventos tales como: sequía, incendios de cobertura vegetal y heladas, cuyos efectos deterioran la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y del ambiente. Estas medidas se enmarcan en procesos de prevención, mitigación y recuperación, así:

1. Medidas de Prevención para evitar la ocurrencia de Incendios de Cobertura Vegetal

1.1 Suspender el otorgamiento de aprovechamientos forestales únicos, persistentes y aislados en zonas rurales del área de jurisdicción de la CDMB, medida de carácter transitorio mientras el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantenga las alertas conforme a las condiciones climáticas que predominen en el territorio con relación al fenómeno “El NIÑO 2024”.

Se exceptúan de esta prohibición los aprovechamientos forestales para proyectos de interés público y árboles que presenten riesgo y/o peligro.

1.2 Se prohíbe en todo el territorio del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), las quemas abiertas y controladas en concordancia con la Resolución CDMB 0011 del 7 de enero de 2010.

En caso de violación a esta disposición, la Autoridad Ambiental impondrá las medidas preventivas y sancionatorias previstas en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

1.3 Se prohíbe a la comunidad en general, turistas y caminantes prender fogatas en zonas de bosques, cultivos y pastos, dejar colillas mal apagadas o residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar.

1.4 Se recomienda a los CMGRD de los 13 municipios del área de jurisdicción de la CDMB mantener activos y socializar los planes de contingencia de incendios forestales con el fin de evitar la ocurrencia y propagación de los mismos.

1.5 Se exhorta a los alcaldes disponer de los elementos necesarios para la atención oportuna de eventos de incendio de la cobertura vegetal, a través de los convenios y/o disponibilidad de los cuerpos de bomberos de cada municipio.

1.6 Se recomienda a toda la ciudadanía dar aviso a las autoridades de policía si observa a personas sospechosas que puedan causar incendios forestales.

1.7 Se recomienda a los municipios del área de jurisdicción, desarrollar con las comunidades, acciones preventivas de educación y cuidado de coberturas vegetales, manejo eficiente del recurso agua y prevención de los incendios de cobertura vegetal.

1.8 Informar a la CDMB, Grupo Elite Ambiental (GEA) teléfono 318-7069866 al correo institucional info@cdmb.gov.co, la ocurrencia de cualquier tipo incendio de cobertura vegetal o quema que pueda afectar el ambiente y ponga en riesgo a las comunidades dentro de su Área de Jurisdicción.

1.9 Dar cumplimiento al Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas.

2. Medidas para afrontar el desabastecimiento de agua.

2.1 Priorizar el uso doméstico sobre los demás usos del agua, en el marco del artículo 43 del Decreto 1541 de 1978 compilado en el Decreto 1076 de 2015.

2.2 Proteger las fuentes o depósitos de agua, con las que se abastecen acueductos o suministros de agua para consumo humano, prohibiendo y restringiendo las actividades que puedan poner en peligro de contaminación las respectivas fuentes de agua y cuyos efectos deben ser prevenidos o corregidos de manera inmediata.

2.3 Disponer en forma inmediata y temporal la reducción de caudales concesionados a titulares de personas naturales o jurídicas determinadas por el equipo técnico de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), en los porcentajes que cada caso particular demande y que individualizaran en un informe técnico debidamente suscrito, con el fin de reducir el riesgo por desabastecimiento en la población debido al descenso en los niveles de las corrientes superficiales de agua en jurisdicción de los trece (13) municipios de la CDMB y mantener un caudal que permita soportar los ecosistemas que de estos dependen a lo largo de las cuencas.

2.4 Prohíbese la utilización de agua superficial y subterránea para los siguientes usos:

2.4.1 Llenado de piscinas.

2.4.2 Lavado de vehículos con manguera.

2.4.3 Lavado de fachadas de edificaciones públicas o privadas, andenes portales, parqueaderos y demás actividades que usen suntuariamente el recurso hídrico.

El control de la presente prohibición será ejercido de manera mancomunada por las Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de usuarios de acueducto, Juntas Veredales, las Empresas Prestadoras del Servicio de agua y municipios a través de las autoridades de Policía.

2.5 A las empresas operadoras de acueductos, operadores de acueductos veredales y al público en general, se les hace un llamado de atención para que ejerzan una vigilancia de las reservas de agua, planeación y uso adecuado de las mismas fortaleciendo la vigilancia, monitoreo y control efectivo sobre las pérdidas de agua y atención oportuna a los daños en las redes de distribución.

2.6 Los entes territoriales, empresas prestadoras del servicio de acueducto y otras entidades encargadas de los sistemas de abastecimiento de agua potable deberán dar prioridad a las acciones de mejoramiento de infraestructura existentes de los sistemas de abastecimiento de agua.

2.7 Las empresas prestadoras del servicio público de abastecimiento de agua deben revisar el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) e implementar los planes de contingencia sobre el uso y ahorro eficiente del agua, que permita un eficaz, eficiente y efectivo aprovechamiento del recurso de manera sostenible, adelantando un balance de la oferta versus la demanda y socializar las medidas a las comunidades por los diferentes medios de comunicación.

2.8 Los usuarios titulares de concesiones de aguas superficiales y subterráneas deberán activar e implementar inmediatamente el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), de acuerdo al Decreto 1090 de 2018.

2.9 Las administraciones municipales y las empresas prestadoras de servicios públicos, deberán presentar ante la CDMB, en un término no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el plan de contingencia para afrontar la temporada seca. Igualmente deberán identificar las fuentes alternas para el abastecimiento de acueductos a su cargo, en caso de presentar desabastecimiento, en el mismo término deberán presentar nombre de la fuente alterna y las coordenadas de la posible captación.

2.10 Medidas específicas para usuarios de concesiones de aguas de la jurisdicción de la CDMB:

2.10.1 Instalación de flotadores en tanques de almacenamiento.

2.10.2 Instalación de válvulas o llaves de cierre.

2.10.3 Realizar mantenimiento y revisión a los sistemas hidráulicos y de almacenamiento.

2.10.4 Mantener en buen estado las tuberías de conducción y aducción.

2.10.5 Instalar sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias como fuente adicional de reserva.

2.10.6 Implementar sistemas de reúso del agua.

2.10.7 Garantizar la devolución a la fuente de los reboses y caudales no empleados.

2.10.8 Proteger y conservar la fuente de abastecimiento.

2.10.9 Implementar tecnologías de bajo consumo, para los diferentes usos del agua.

3. Ante la posibilidad de heladas o descensos significativos de las temperaturas mínimas del aire.

3.1 Se recomienda a agricultores, ganaderos especialmente de los municipios: El Playón, Piedecuesta, Tona, Vetas, California, Suratá, Charta y Matanza los cuales cuentan con áreas de páramo, mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante esta temporada seca o de menos lluvias de fin y comienzo de año.

3.2 Se sugiere cubrir las plantas con coberturas plásticas y humedecer el terreno al final de la tarde e inicios de la noche, toda vez que no se descarta la posibilidad de descensos de las temperaturas del aire cercanas o por debajo de 0 °C.

4. Medidas para la atención de episodios de contaminación del aire de la CDMB.

4.1 Fortalecer la articulación con municipios en funciones de prevención, control, monitoreo y vigilancia ante la contaminación atmosférica.

4.2 Dar cumplimiento al Plan de Gestión para la Calidad del Aire de la CDMB adoptado mediante la Resolución 1233 de 15 de septiembre de 2022.

4.3 Implementar el Plan para la atención de episodios de contaminación del aire de la CDMB, adoptado mediante la Resolución 1233 de 15 de septiembre de 2022.

4.4 Facilitar la comunicación de manera oportuna, clara y eficiente a la población sobre la situación, las medidas y las precauciones necesarias a través de los diferentes canales de comunicación disponibles.

4.5 Determinar e imponer las medidas transitorias relacionadas a las fuentes móviles y fijas según los niveles de alerta que se presenten con base en las mediciones de la CDMB de los contaminantes criterio de calidad del aire, en la jurisdicción de

esta Corporación ambiental, en conjunto con las demás instituciones involucradas y controlar la contaminación generada por el parque automotor.

- 4.6 Evaluar los horarios de funcionamiento de incineradores, cooker, hornos, calderas y/o actividades industriales contaminantes y realizar operativos de control y vigilancia para fuentes fijas por actividad industrial en la CDMB, priorizando las que no cuenten con sistemas de control de emisiones o que, según los registros de los estudios de evaluación de sus emisiones, presenten grado significativo del aporte contaminante (muy alto, alto y medio).
 - 4.7 Suspender el otorgamiento de permiso de emisiones atmosféricas para el caso de quemas controladas en actividades agrícolas y mineras, en cuanto se mantenga el episodio crítico climático.
 - 4.8 Realizar estricto seguimiento, a los permisos de emisiones ya otorgados para quemas controladas agrícolas y mineras, y de sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas
- 5. Recomendaciones generales para la comunidad.**
- 5.1 No arrojar basuras ni escombros en quebradas, ríos y calles de centros urbanos.
 - 5.2 Estar atentos durante los próximos días a los comunicados e información emitida por el Ideam y las demás autoridades municipales de emergencia.
 - 5.3 Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y de respuesta.
 - 5.4 Disponer y compartir con los familiares y vecinos los números telefónicos de los organismos de respuesta municipales.
 - 5.5 Monitorear el estado de los acueductos veredales y realizar su mantenimiento preventivo.
 - 5.6 A bañistas y habitantes que ocupan rondas de fuentes hídricas se recomienda estar atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a los avisos de las autoridades locales.
 - 5.7 Hacer uso adecuado y eficiente de agua y energía eléctrica, para evitar su desabastecimiento y racionamiento.
 - 5.8 Usar el agua limitadamente para actividades de riego de prados, jardines. Los municipios deberán articular acciones y horarios regulados para esta actividad, en coordinación con las entidades administrativas responsables.
 - 5.9 En esta época de menos lluvias es necesario reducir las prolongadas exposiciones a la radiación solar directa, a fin de evitar insolaciones y minimizar los efectos nocivos de los rayos ultravioleta.
 - 5.10 Mantener en buen estado los tanques y demás recipientes de almacenamiento de agua dentro de las viviendas, éstos pueden ser criaderos de vectores como zancudos. Como usuarios, seguir las orientaciones para preservar la calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella al interior de nuestras viviendas.
 - 5.11 Denunciar, de ser necesario de manera anónima, cualquier indicio del fuego ante las alcaldías, gobernación, Corporación Autónoma Regional o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 - 5.12 Hacer parte de sus Juntas de Acción Comunal y organizar planes comunitarios de respuesta.
 - 5.13 Informarse de las recomendaciones que dan sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.
 - 5.14 Tramitar y formalizar la concesión de aguas subterráneas provenientes de pozos profundos y/o aljibes que se encuentren en el área de jurisdicción de la CDMB.
 - 5.15 Abstenerse de realizar quemas y deforestación, actividades prohibidas por la ley.

6. Recomendaciones para la comunidad por amenaza de eventos hidrometeorológicos (Movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y deslizamientos).

- 6.1 Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente, en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía.
- 6.2 Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.
- 6.3 En este sentido, se sugiere a la comunidad un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.
- 6.4 Atender los principios de Precaución y Autoprotección mencionados en la Ley 1523 de 2012, para no ocupar las áreas afectadas y mantener los respectivos aislamientos de los cauces y taludes, con el objeto de evitar afectaciones por el desencadenamiento de fenómenos naturales, lo anterior teniendo en cuenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Resolución CDMB N° 1294 de 2009 y lo establecido en los Planes y Esquemas de Ordenamiento Territorial.

7. Recomendaciones para las Entidades Territoriales.

- 7.1 Mantener activos los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo concerniente al seguimiento, control, evolución y desarrollo de la actual temporada seca 2024 influenciada por el Fenómeno El Niño.
- 7.2 Mantener actualizados los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD), la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias (EMRE) y

los Planes de Contingencias Municipales para la Temporada Seca y Temporada de más lluvias.

- 7.3 Igualmente, con el fin de lograr el desarrollo efectivo de la Gestión del Riesgo de Desastres, es importante tener en cuenta los niveles de actuación frente a Emergencias o Desastres de que trata la Ley 1523 de 2012 y que corresponden a:

- 7.3.1 Nivel Municipal: Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres.
- 7.3.2 Nivel Departamental: Consejo Departamental de la Gestión del Riesgo de Desastres.
- 7.3.3 Nivel Nacional: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Cada uno de los niveles (Municipal, Departamental, Nacional) deben asumir el rol de coordinación en su respectiva jurisdicción, realizando las solicitudes de apoyo al nivel inmediatamente superior, en consideración de sus necesidades y sus capacidades.

- 7.4 Se recomienda incluir prioritariamente en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales metas e inversión específica para el fortalecimiento de la atención y prevención de emergencias, así como para la adaptación al cambio climático y fortalecimiento del sistema ambiental.

Artículo 3° Información. Instar a las entidades territoriales de la jurisdicción de la CDMB para que reporten información, dispongan los recursos necesarios y acciones pertinentes en la recuperación y restauración de los ecosistemas, la fauna y el medio ambiente, una vez se presenten eventos tales como: sequía, incendios de cobertura vegetal y heladas, cuyos efectos deterioran la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y del ambiente. Estas medidas se enmarcan en procesos de recuperación, así:

1. Dar cumplimiento a las “Guías Técnicas para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas de Colombia” del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las recomendaciones que la autoridad ambiental CDMB considere disponer, según las condiciones bióticas y abióticas donde se degrade el territorio.
2. Se recuerda que las medidas de restauración, rehabilitación o recuperación dependen del objetivo que se quiera realizar y que sea posible, manejo del paisaje, de la particularidad territorial, entre otras, es recomendable articular las medidas con trabajo comunitario para aumentar la probabilidad del éxito y beneficios potenciales que derivan del proceso.

Artículo 4°. Prohibiciones especiales. Sobre las áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos existentes en la jurisdicción de la CDMB, se hace necesario establecer las siguientes medidas y prohibiciones: No permitir el ingreso de ganado y/o pastoreo, la realización de quemas y/o fogatas, la disposición final de residuos sólidos y la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y de especies invasoras.

Artículo 5°. Activación de planes. Las entidades territoriales que se encuentren en la jurisdicción de la CDMB deberán tomar medidas y activar los planes de contingencia en los siguientes sectores, teniendo en cuenta la mayor afectación del fenómeno El Niño:

1. Sector de Servicios Públicos, en especial los acueductos veredales y urbanos
2. Sector Agropecuario, por déficit hídrico
3. Sector Ambiente por aumento en incendios forestales
4. Sector Salud por propagación de enfermedades virales y afectación en la calidad del aire
5. Sector Hidroenergético, por disminución de los niveles de agua en la zona de los embalses

Artículo 6°. Control y vigilancia. Solicitar a los Alcaldes y Autoridades Policiales del Área de jurisdicción Ambiental, sin perjuicio de las acciones que adelante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), que ejecuten en su jurisdicción territorial las funciones de control, monitoreo y vigilancia que les compete, velando por la conservación y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables tales como el agua, especies de flora y fauna silvestres, cauce y lecho de las fuentes hídricas permanente y no permanentes, material minero, evitando su aprovechamiento ilegal, velando por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y propendiendo por la protección del derecho constitucional a un ambiente sano e informar a la Autoridad Ambiental con el fin de adelantar los procesos sancionatorios de conformidad con la ley.

Artículo 7°. Régimen sancionatorio. Si se presentan situaciones fácticas que puedan constituir un hecho punible, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) remitirá a las autoridades competentes copia del informe respectivo, para que se adelante las investigaciones a las que haya lugar. Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento sancionatorio ambiental que podrá adelantar dicha autoridad ambiental.

Parágrafo. En caso de violación a las disposiciones ambientales contempladas en la presente Resolución, la CDMB impondrá las medidas preventivas y sanciones previstas y sancionatorias previstas en los artículos 36 y 40 de la Ley 1333 de 2009, entre ellas multas diarias hasta de cinco mil (5000) salarios diarios mínimos legales vigentes.

Artículo 8°. Comunicación. Comunicar y remitir copia de la presente resolución al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Gobernación de Santander, a la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, Personeros Municipales, al

Área Metropolitana de Bucaramanga, a los Municipios de Bucaramanga, California, Charta, El Playón, Girón, Floridablanca, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Rionegro, Surata, Tona y Vetás, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Policía Ambiental del área de jurisdicción ambiental.

Parágrafo. Se solicita la socialización de la presente resolución a las autoridades municipales con sus comunidades a través de sus medios de divulgación y hacer llegar el mismo a las Juntas de Acción Comunal de su área de jurisdicción.

Artículo 10. *Publicación.* Publíquese el contenido de la presente resolución en el **Diario Oficial**, en el boletín ambiental de la CDMB y página web de la CDMB, así como las Alcaldías del Área de Jurisdicción de la Corporación, conforme lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 11. *Vigencia.* El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Bucaramanga, a 30 de enero de 2024.

El Director General CDMB,

Juan Carlos Reyes Nova.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 250570. 5-II-2024. Valor \$965.300.

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 20241200001824 DE 2024

(febrero 2)

Radicado número: 20241200001824

por la cual se reglamenta la entrada en operación legal de las Máquinas Electrónicas Tragamonedas que a la fecha de expedición de la presente resolución no se encuentren registradas en Coljuegos operando con la debida autorización y en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte y azar -METs de Paz-.

El Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), en uso de las facultades legales y en especial de las contempladas en los artículos 1° y 2° de la Ley 643 de 2001, el numeral 13 del artículo 5° del Decreto 4142 de 2011, modificado por el numeral 11 del artículo 2° y los numerales 1 y 8 del artículo 5° del Decreto 1451 de 2015, el artículo 14 de la Ley 1393 de 2010, modificado por el artículo 59 de la Ley 1955 de 2019, el artículo 56 del Decreto Ley 2106 de 2019 el Decreto 1494 de 2021 y,

CONSIDERANDO:

Que en desarrollo del artículo 336 de la Constitución Política, el cual establece que "(...) La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud"; se expidió la Ley 643 de 2001 que fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

Que la Ley 643 de 2001, define el monopolio como "la facultad exclusiva del Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud...".

Que el artículo 4° de la Ley 643 de 2001, determina expresamente las prácticas de juegos de suerte y azar que se encuentran prohibidas en el territorio nacional, dentro de las que se tiene: "La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar que no cuenten con la autorización de la entidad o autoridad competente, desconozcan las reglas del respectivo juego o los límites autorizados" y como consecuencia de ello la misma ley en su artículo 44 determina el régimen sancionatorio que la entidad pública administradora del monopolio deberá para aplicar en caso de detectar operación ilegal de juegos de suerte y azar.

Que mediante Decreto Ley 4142 de 2011 se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos). En el artículo 5° ibidem del precitado decreto ley, modificado por el artículo 2° del Decreto 1451 de 2015, los numerales 5 y 9 establecen respectivamente como funciones de Coljuegos: "5. Definir y desarrollar diferentes esquemas de operación de los juegos de suerte y azar de su competencia que se requieran para la explotación efectiva del monopolio rentístico, incluida su operación mediante terceros y/o en asociado con terceros" y "9. Apoyar y coordinar con las demás

entidades o autoridades del Estado, las acciones de control a la ilegalidad que se requieran para el cumplimiento de las funciones a cargo de la Empresa.

Que el artículo 32 de la Ley 643 de 2001 definió los juegos localizados como modalidades de juegos de suerte y azar que operan con equipos o elementos de juego, en establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición necesaria para poder apostar, tales como los bingos, video bingos, esferódromos, máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares. Son locales de juegos aquellos establecimientos en donde se combinan la operación de distintos tipos de juegos de los considerados por esta ley como localizados o aquellos establecimientos en donde se combina la operación de juegos localizados con otras actividades comerciales o de servicios.

Que el Gobierno nacional, mediante la Ley 2294 de 2023 expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial De La Vida", la cual en su artículo 23 establece que el Gobierno nacional en concurrencia con las entidades correspondientes para el desarrollo de tareas específicas, deberá poner en marcha los instrumentos para el desarrollo de la Paz Total, uno de estos instrumentos tiene que ver específicamente con regiones de paz, en los siguientes términos:

"B. *REGIONES DE PAZ.* La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la encargada de coordinar y articular con las entidades correspondientes la apropiación presupuestal para la financiación de planes, programas y proyectos requeridos para la puesta en marcha de las regiones de paz creadas en la Ley 2272 de 2022, con el objetivo de promover las transformaciones territoriales en el marco de la Paz Total, las cuales deben implicar la superación del déficit de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que han padecido los habitantes de estos territorios y debe implicar la terminación de las violencias armadas de origen sociopolítico y de las que se proponen el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza por medio de las economías ilegales". El Gobierno nacional promoverá la articulación a nivel nacional y regional, para la comprensión integral y abordaje de las economías ilegales en su relación con la generación de violencias, y para la garantía de alternativas y oportunidades para los pobladores de las regiones afectadas por las mismas, con enfoque de género, diferencial y territorial" subrayado fuera del texto.

Que en la Base del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, documento que plasma la hoja de ruta del Gobierno nacional para convertir a "Colombia Potencia Mundial de la Vida", dentro del catalizadores "B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad" "Numeral 14. Regulación de las drogas: del prohibicionismo a la dignificación de las personas, comunidades, territorios y el medio ambiente" señala que:

"(...) Se impulsará el desarrollo territorial con la sustitución de economías ilegales a legales, considerando las vocaciones productivas de las zonas intervenidas. Además, se sustentará en la participación e inclusión de todos los sectores, comunidades y territorios, contribuyendo a la implementación del Acuerdo de Paz, la construcción de la Paz Total, y será posicionada en el ámbito internacional (...)"

Que aunado a lo anterior, el Estado Colombiano a través de la expedición de la Ley 905 de 2004, busca estimular la promoción y formación de los mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y mediana empresas, MiPymes. Así mismo, la Ley 2069 de 2020, "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia", establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad en el territorio nacional.

Que según el documento denominado "Caracterización y estimación del mercado de mets localizados no autorizados de juegos de suerte y azar en Colombia" realizado por FEDESARROLLO en el año 2018, en el punto 2.3.3.1.1.1.1 se realiza un análisis de la estructura del negocio de las METs que están fuera del marco de la legalidad, y se señalan entre otros los siguientes aspectos:

"Debido al alto costo de las máquinas, el nivel de capital que exige el negocio de las METs prohibidos es elevado. Esto también incrementa los riesgos en caso de incautación o destrucción por parte de las autoridades. Sin embargo, ciertos mecanismos de operación permiten que pequeños empresarios independientes (tenderos, dueños de billares y droguerías) entren al negocio.

"(...) "Por último, en algunos lugares con alta presencia de máquinas mets no autorizadas, también existe una modalidad en la que los dueños de las máquinas son o están aliados con grupos criminales. En estos lugares el tendero no puede negarse a que en su negocio funcione una máquina ilegal, los grupos criminales simplemente se la instalan y pueden compensarlo o no por el riesgo frente a las autoridades.

Que el mencionado estudio de caracterización del mercado no autorizado de juegos de suerte y azar en Colombia estimó que el tamaño de este en lo que respecta a la de METs "... oscila entre \$39 a \$945 mil millones de pesos, es decir máximo el 34.3% del mercado total es ilegal", es decir, en Colombia hay un total de 50 mil máquinas de juegos de suerte y azar no autorizado, por cada diez elementos de ese tipo, cuatro están funcionando de manera irregular, lo que le está costando a la Nación alrededor de un billón de pesos al año. Se estima que para este año ese número oscila en las 90 mil unidades.

Que en el entendido que: a) el juego no autorizado en la operación de los juegos de suerte y azar es un flagelo constante que afecta directamente las finanzas del sector salud de los colombianos, b) es menester de Coljuegos como administrador de los juegos de suerte y azar de su competencia adelantar las acciones que considere necesarias en el marco de sus competencias para un eficiente control de la operación de juegos de suerte y azar no autorizada, y, c) el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida ", como elemento para el desarrollo de la Paz Total hace relación de la sustitución de economías ilegales a legales. En virtud de lo anterior, se hace necesario expedir la presente reglamentación mediante la cual